Paro de junio en Ecuador: dieciocho días para conquistar una victoria

Por: Guido Proaño A.

Luego de 18 días de masivas y combativas luchas, el paro indígena y popular que inició el 13 junio de 2022 conquistó una gran victoria. Es el acontecimiento político-social más importante de los últimos años en nuestro país, debido a su multilateral incidencia en el desenvolvimiento de la sociedad ecuatoriana, a las características que tuvo la lucha, a los efectos provocados en la subjetividad de las masas, a las lecciones que deja el movimiento para futuros combates, entre otros aspectos.

Hace tres años, en octubre de 2019, un similar movimiento de masas también culminó victorioso y marcó huella en la vida del país, la intención del gobierno de Lenín Moreno de elevar el precio de los combustibles fue frenada con un levantamiento indígena y popular que duró doce días, además impidió la promulgación de reformas laborales dirigidas a la precarización del trabajo. Esa conquista fue escamoteada después por el presidente Guillermo Lasso, cuando estableció un mecanismo de elevación mensual del precio de las gasolinas extra, súper y diésel, anclada a la variación del precio del barril del petróleo en el mercado internacional, medida de fuerte impacto negativo en la economía de los hogares populares.

Sin embargo, esa es apenas una de las tantas políticas adoptadas por el gobierno que tienen como propósito beneficiar al gran capital nativo e internacional y provocan el incremento de la pobreza entre

las masas del campo y la ciudad. Para tener una idea de lo que ocurre en el Ecuador de hoy, diremos que —según el INEC— el 32,2% de ecuatorianos vive con menos de 2,8 dólares al día; cerca de seis millones de personas vive en condición de pobreza, de ellas más de dos millones seiscientas mil en pobreza extrema, equivalente al 14,7% de la población total; un 5,2% de la Población Económicamente Activa (PEA) está desempleada y, entre quienes tienen un empleo («adecuado» o «inadecuado»), registran un ingreso promedio de USD 290 al mes, lejos del salario básico de USD 425 mensual; la pobreza y la pobreza extrema golpean más a la población rural, donde creció del 38% al 49,2%, desde 2016 a junio de 2021.

Una situación de esta índole no puede dejar de provocar descontento en el pueblo y rabia con los responsables de que esto ocurra: el gobierno y sus políticas que favorecen a los poderosos grupos económicos y al capital monopolista internacional, y, los ricos del país que incrementan sus fortunas mientras la mayoría se empobrece.

La protesta tuvo como escenario un país sumido en una profunda crisis que envuelve a toda la institucionalidad burguesa, expresada en la confrontación ejecutivo–legislativo y en las agudas contradicciones al interior de la Asamblea Nacional; en la poca credibilidad de la población en las distintas instituciones del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo, la Función Judicial, la Policía y las Fuerzas Armadas, los grandes medios de comunicación, los partidos políticos de la burguesía; en la evidente debilidad política del gobierno central y el desprestigio de la mayoría de las administraciones de los gobiernos seccionales.

En abril de este año, al analizar el desenvolvimiento de la crisis política, nuestro Partido señalaba que «las pugnas entre legislativo y ejecutivo, no se producen porque unos defienden a los trabajadores y el pueblo y otros no, sino por el afán de captar posiciones para ejercer presión, para tarifar votos, son contradicciones típicas entre facciones burguesas, que se amainan cuando consideran que sus intereses de clase, en general, corren peligro, por eso, un momento votan para favorecer a un grupo y otro lo hacen con un sector distinto. […] Hay una descomposición de la institucionalidad burguesa, la crisis que vive el país es expresión de la crisis del capitalismo, es una manifestación de la estructura de su Estado y de la política que aplica la burguesía dueña del poder, es una expresión de la decadencia de la sociedad burguesa. […] Con independencia de clase y su propio proyecto político, los trabajadores y el pueblo deben dar una respuesta

clara y contundente a esta situación. Deben enfrentar a la crisis y a los responsables, buscando una salida política que ponga por delante sus propios intereses».[1]

Respuesta popular a la crisis

No fue difícil avizorar que el año 2022 estaría caracterizado por la agudización de la lucha de clases y que la movilización popular tendría un especial protagonismo, pues, a más de las duras condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo, el gobierno tenía previsto ejecutar los principales proyectos económico-políticos de su programa neoliberal. Anunció el interés de privatizar varias empresas estatales rentables, como la CNT; ampliar de la frontera petrolera –incluyendo la afectación al Parque Yasuní—; profundizar la explotación minera a gran escala, entregando concesiones a monopolios internacionales; adoptar reformas laborales que llevarían a la precarización del trabajo; y, aprobó un presupuesto estatal con recortes en los sectores educación y salud.

En enero, el Frente Popular y el Frente Unitario de los Trabajadores convocaron las primeras movilizaciones de rechazo a la política gubernamental, de allí en adelante las acciones de protesta fueron constantes y diversas en cuanto a los sectores sociales que optaron

[1] En Marcha. Edición 1997, del 20 al 26 de abril 2022. https://www.pcmle.org/EM/spip.php?article11760

por tomar la calle: los pequeños y medianos productores de maíz, arroz, los lecheros, los trabajadores y profesionales de la salud, el movimiento de mujeres, los estudiantes universitarios y secundarios, los defensores del medio ambiente, pobladores de barrios populares, pensionistas de la seguridad social, pacientes de los hospitales del IESS, entre otros, protagonizaron movilizaciones, plantones, corte de vías. Particular importancia tuvieron la movilización del 1 de mayo y la lucha del magisterio agrupado en la Unión Nacional de Educadores, UNE.

Las marchas con motivo de la celebración del 1 de Mayo advirtieron un nuevo estado de ánimo en las masas y la irrupción del movimiento popular como actor crítico de la situación del país. Fueron movilizaciones numerosas, expresaron el repudio a la política antipopular y entreguista del gobierno, condenaron los anuncios de privatización de las empresas estatales y la política laboral antiobrera, rechazaron la pobreza, el desempleo y la incapacidad del gobierno para resolver los apremiantes problemas de los trabajadores y el pueblo. La insatisfacción popular se evidenció en los gritos ¡Solo el pueblo salva al pueblo! y ¡Que se vayan todos!, que resonaron en todo el país y se expresaron también en las futuras acciones de protesta.

La constante movilización del magisterio en todo el país forzó a la Asamblea Nacional a ratificarse en las reformas a la LOEI aprobadas por la anterior legislatura, reiterando así el derecho de los docentes a la homologación salarial; sin embargo, la intención del gobierno de desconocer esta resolución llevó a la profundización de la lucha y a la declaratoria —el 3 de mayo— de una nueva huelga de hambre, que duró 18 días y culminó victoriosa con la resolución de la Corte Constitucional dando razón al pedido de la UNE. Durante varios meses, el magisterio ecuatoriano realizó movilizaciones, plantones, huelgas de hambre, tomas de locales de instituciones públicas, presentó propuestas, etc. Fue el primer sector social del país que torció el brazo al gobierno y dejó una gran lección: sí es posible conquistar derechos, pero para hacerlo hay que luchar y contar con una acertada dirección política.

El continuo deterioro de las condiciones de vida del pueblo y la decisión del gobierno de «mantenerse firme» en la aplicación de su programa económico neoliberal, planteó la necesidad de organizar nuevas acciones de protesta. El Frente Popular llamó a hacer de junio un mes de lucha de los trabajadores y los pueblos del Ecuador, que se expresaría en acciones locales y generales de los distintos sectores

sociales por sus reivindicaciones particulares y en contra de la política antipopular del gobierno; junto al FUT convocó a una nueva Jornada Nacional de Protesta para mediados de junio.

El movimiento indígena y popular toma la calle

El lunes 13 de junio arrancó el paro convocado por la Conaie, Fenocin y Feine. Desde el primer día, el movimiento demostró fuerza y cosechó simpatía en otros sectores populares que miraron como suyas las diez demandas presentadas al gobierno; así mismo, desde un inicio se pudo apreciar el discurso articulado por el gobierno y la derecha para enfrentar la protesta. Guillermo Lasso llamó a la unidad en contra de la delincuencia organizada; el ministro del Interior, Patricio Carrillo, se adelantó en advertir que se producirán saqueos, secuestros y amenazó con ejercer una dura represión; la derecha decía que el propósito de la movilización era echar abajo al gobierno y la «gente de bien» de Quito retomó el discurso de que los indígenas «vienen a destruir la capital»[2] y que deberían quedarse en sus provincias. Se conoció que la Policía tenía un plan para infiltrar agentes de

[2] El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, fue parte de quienes difundieron esos puntos de vista e incentivó la realización de las marchas en contra de la presencia de los indígenas en la ciudad; también presentó medidas cautelares para que la Asamblea Nacional no debata una posible revocatoria del decreto de excepción expedido por el Gobierno.

civil en las protestas, para los operativos de represión y para el cometimiento de actos de provocación. A pesar de que en sus declaraciones iniciales, Lasso y otros altos funcionarios del gobierno subestimaban la fuerza del movimiento y se esforzaban por quitar razón a la lucha, no pudieron ocultar su preocupación y por eso siempre apelaron a la represión. Se pudo observar que en las altas esferas se jugaba con un doble discurso, mientras el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, hablaba de la disposición del gobierno para dialogar, otros se afanaban en descalificar a la protesta y amenazaban con poner en marcha el «uso progresivo de la fuerza»[3].

Un elemento importante fue la rápida adhesión de los sectores populares de las ciudades, desde el primer día se movilizaron estudiantes secundarios y universitarios, pobladores de los barrios populares, maestros, artistas y poco a poco se fueron uniendo sindicatos, profesionales de la salud, comerciantes minoristas, choferes y otros contingentes, sea como combatientes en la calle o cumpliendo acciones de solidaridad y logística.

El balance del primer día de lucha mostraba el bloqueo de carreteras en varias provincias, principalmente en las provincias amazónicas y en la sierra centro y norte, y manifestaciones en varias ciudades; sin embargo, el ministro de Gobierno dijo que «el número de manifestantes fue sustancialmente inferior al que esperábamos».

Gasolina para apagar el fuego

En la madrugada del 14 de junio, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, fue ilegalmente detenido en Pastocalle, Latacunga. Si la intención del gobierno fue descabezar o debilitar al movimiento, el efecto resultó totalmente contrario, provocó la cohesión del movimiento indígena y la unidad de otros sectores populares, la protesta tomó más vuelo, nuevas provincias se unieron a la lucha y en otras creció en masividad, los choques entre manifestantes y fuerzas represivas se repitieron en varios puntos.

---

[3] Así se confirmaba la denuncia sostenida por organizaciones populares y de izquierda, que el verdadero propósito de la ley conocida como de uso progresivo de la fuerza, estaba orientado de manera principal para reprimir la protesta social. Esa ley fue aprobada pocos meses antes en la Asamblea Nacional, con votos del correísmo (UNES), socialcristianos, ID, CREO, los llamados independientes y asambleístas de PK identificados con el gobierno.

El gobierno cometió un grave error político, uno de los tantos en el curso de la paralización, pues, puso en evidencia que el llamado al diálogo no era más que una treta y que la principal línea de acción era la represión, mas no atender los reclamos planteados. En Quito, el lugar en donde Iza estuvo detenido algunas horas en la mañana permaneció militarizado, se convirtió en punto de concentración de gente que exigía su libertad, avivaba el paro y demandaba atención a sus pedidos; los alrededores de la Fiscalía en Cotopaxi fueron copados por miles de personas desde el momento que se conoció que ahí se realizaría la audiencia de habeas corpus, que culminó con la formulación de cargos contra el presidente de la Conaie por el supuesto delito de paralización de servicios públicos y le impusieron medidas sustitutivas para que permanezca en libertad.

La detención del dirigente indígena provocó un fraccionamiento en la institucionalidad, la Fiscalía General emitió un comunicado informando que Iza no había sido puesto a órdenes de esa institución y que tampoco había recibido el parte policial respectivo, indicaba además que había tomado medidas para «evitar detenciones ilegales y arbitrarias». La Asamblea Nacional debatió y censuró esa detención.

Ese mismo día la oligarquía guayaquileña repitió la conducta autoritaria y racista exhibida en el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, movilizó volquetas del municipio para bloquear los cinco puentes de acceso a la urbe e impedir el ingreso de indígenas desde otras provincias.

Día a día el paro se fue fortaleciendo, nuevos sectores se incorporaron y el nivel de la lucha subió de tono. La crisis política del país, que hasta entonces se manifestaba principalmente en la agudización de las contradicciones interburguesas, en las esferas del poder, contó con un elemento cualitativamente distinto, el protagonismo de las masas que peleaban en la calle, cuestionaban a la institucionalidad por su responsabilidad directa en la crítica situación del país. De esta manera, el paro colocó al centro del escenario político-social las contradicciones pueblo-gobierno neoliberal, pueblo-clase dominante, pueblos-dominación imperialista porque confrontó la política fondo-monetarista.

Las contradicciones interburguesas también se fueron caldeando, Lasso se vio incapaz de mostrar el apoyo total de la burguesía. En el curso de los días del paro, la crisis que tenía entrampada a la Asamblea continuó desarrollándose y se fueron decantando de manera más clara las posiciones de unos y otros bandos, de unos y otros asambleístas. El comportamiento del correísmo fue, en un inicio, bastante ambiguo, le pesaban los compromisos con el socialcristianismo y otros derechistas para la consolidación de la nueva mayoría parlamentaria y los acuerdos mantenidos con el gobierno, a su vez intentaba presentarse como defensor de los intereses del pueblo. Los socialcristianos, que expresaron su oposición a una buena parte de la política del gobierno y en algunas ocasiones votaban junto este, cuidaban sus intereses de clase, y eso se refrendó cuando la Asamblea debatió la aplicación del artículo 130 de la Constitución, que establece la denominada «muerte cruzada».

La debilidad política del gobierno era evidente: con una fuerza minoritaria en la legislatura, pero sobre todo con bajos niveles de credibilidad y de respaldo en la población. No hay que olvidar cómo nació el gobierno de Lasso, un apreciable número de personas votó por él para cerrar el paso al candidato del correísmo, él mismo llegó a la segunda vuelta con un fraude electoral y el porcentaje de votos nulos en el balotaje fue muy alto, todo eso no le permitió contar con una base social sostenible. La expectativa que creó en algunos sectores de la población con sus ofrecimientos de campaña y que creció con el inicial éxito en una primera fase de la campaña de vacunación en contra del Covid 19, se fue difuminando y transformando en desilusión en los sectores populares y en los denominados sectores medios por efecto de sus políticas.

Así las cosas, el paro indígena y popular enfrentaba a un presidente con una mala imagen en el país, aislado políticamente de la Asamblea, en medio de una institucionalidad desprestigiada; el paro, en cambio, contaba con el apoyo mayoritario de una población descontenta con el gobierno, lo que explica su rápida incorporación a la lucha.

La protesta en todo el país y el epicentro de la lucha

A partir del tercer día, caravanas provenientes de varias provincias fueron llegando a Quito, que luego de unos días se convertiría en el epicentro de la lucha. Se incrementaron los cierres de vías, hubo incursiones masivas en las ciudades, en algunos casos se produjeron tomas de las gobernaciones provinciales e instituciones del Estado, las operaciones del transporte interprovincial fueron afectadas en todo el país y en varias provincias suspendidas por completo.

La lucha en las zonas urbanas poco a poco fue creciendo, en ello jugaron un importante papel las organizaciones integrantes del Frente Popular; en las provincias de la Costa, en donde el movimiento indígena evidenció debilidad, el Frente Popular tuvo la iniciativa y mantuvo la bronca hasta el último día del paro, tanto en las ciudades como en zonas rurales.

La Jornada de Protesta convocada para el 16 de junio por la UNE y el Frente Popular dio un particular impulso a lucha en las ciudades. Se la cumplió en 23 provincias, fue el primer momento en el que el paro tuvo expresión simultánea en todo el territorio.

El desarrollo de la lucha demostró el protagonismo de dos franjas del movimiento popular: el movimiento indígena —a la cabeza la Conaie— y las organizaciones del Frente Popular. Indudablemente, la vigorosidad del movimiento indígena es mayor. Están presentes también centenares de organizaciones populares de distinto tipo, movimientos y partidos políticos de izquierda, como Unidad Popular, el PSE, el PCMLE, el Movimiento Guevarista, entre otros.

El movimiento indígena concentró fuerzas en la capital, alrededor de 15 mil personas arribaron desde varias provincias, conforme llegaban fueron alojadas en casas comunales de los barrios populares, pero resultaron insuficientes. Se lanzó el pedido ¡Que se abran las universidades, para convertirlas en centros de paz y acogida humanitaria!, la Universidad Central del Ecuador, la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Salesiana abrieron sus puertas para ese propósito.

La capital fue tomada por los manifestantes, no solo eran quienes vinieron de otras provincias; la juventud estudiantil, organizaciones de mujeres, artistas, profesores, profesionales se unieron a la lucha, el tránsito fue escaso, el transporte público privado y municipal se paralizó, en las tardes y noches había sectores de la ciudad controlados totalmente por la protesta, sobre todo en el centro y sur, en los barrios populares se prendía la bronca en las noches.

El desenvolvimiento de esta jornada permitió ver acumulado político experimentado por el movimiento indígena y popular. Ahora, a diferencia de jornadas similares anteriores, concentraron fuerzas en Quito sin abandonar ni debilitar la lucha en los territorios. Esto fue posible por la confluencia de varios factores, como la acción conjunta de la Conaie, Fenocin, Feine, la participación de otras organizaciones, como el Frente Popular, que sostuvieron la lucha en las ciudades y en las provincias de la costa, el descontento de los sectores populares con el gobierno, la identificación de esos sectores con la plataforma de lucha planteada.

Concentrar fuerzas en la capital fue un acierto y una necesidad política, permitió al movimiento proyectar hacia todo el país un mensaje de su fortaleza, de su capacidad de lucha, las decisiones políticas que tomaba en cada circunstancia y le permitía actuar de manera rápida y directa sobre el Ejecutivo y el Legislativo con la fuerza de las masas.

La zanahoria y el garrote

Cinco días después de iniciado el paro, el presidente Lasso anunció el estado de excepción en las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, que autorizaba a la Policía y a las Fuerzas Armadas el uso de fuerza letal, restringía el derecho a la información, prohibía reuniones y manifestaciones públicas y, en Quito, declaraba el toque de queda. La restricción del derecho a la libertad de información establecía que el Gobierno «podrá requerir a los prestadores que operen redes públicas de telecomunicaciones la suspensión, degradación de calidad o limitación temporal de los servicios». Hasta ahora ningún gobierno había planteado medidas de esa índole. En el mensaje televisivo, Lasso se hizo eco del discurso promovido desde los medios de comunicación por la derecha más reaccionaria, al asegurar que está «comprometido a defender la capital».

El repudio generalizado que provocó esa declaratoria, y particularmente la restricción del derecho de información obligó al gobierno a retractarse, al día siguiente, en el tema de la información. A pesar de haber prohibido las concentraciones y manifestaciones públicas, respaldó y se sumó a la convocatoria a la denominada «marcha por la paz», convocada en Quito en contra del paro por la derecha y los «niños bien.

En la Asamblea Nacional se levantaron voces que pidieron la revocatoria del decreto, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó para dos días después al plenario de la Asamblea para

tratar el tema; una maniobra político-jurídica del gobierno impidió que ese decreto sea discutido en la legislatura.[4]

A pesar de que Lasso y otros altos funcionarios señalaban que no hay motivos para la protesta, que el gobierno está atendiendo las necesidades de la gente, en la misma cadena que decretó el estado de excepción anunció que el bono de desarrollo humano subirá de USD 50 a USD 55, que se condonará los créditos vencidos de hasta USD 3.000 en BanEcuador, que habrá un subsidio para los pequeños y medianos agricultores y que estas medidas tendrían un efecto inmediato, dijo que tiene la intención de abrir líneas de créditos de hasta USD 5.000 para los agricultores con un plazo de 30 años, también declaró en emergencia el sistema de salud pública y anunció que duplicaría el presupuesto que actualmente tiene el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.

No es difícil interpretar que las medidas adoptadas el viernes 17 de junio llevaban implícito el reconocimiento de que el movimiento tenía fuerza e intentaba desactivarlo o, al menos, que disminuya en intensidad. Nada dijo respecto de una de las demandas principales del paro, la rebaja del precio de los combustibles; la respuesta del movimiento indígena y popular fue que lo anunciado por Lasso está bien, pero no es suficiente, que hay una plataforma de diez puntos que debe ser atendida, por lo tanto, la lucha continuaba.

Con el estado de excepción en sus manos, el plan represivo del gobierno subió de nivel. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue allanada por la Policía Nacional el día sábado 18 de junio, una «denuncia anónima» habría indicado que ahí se guardaba «material bélico como explosivos y armas artesanales» que, por supuesto, nunca lo encontraron. La orden emitida por la Fiscalía contemplaba «allanamiento, descerrajamiento, quebramiento de las puertas o cerraduras, aprehensión de personas e incautación de indicios que se pudieran encontrar en las instalaciones». El rechazo de los artistas, promotores culturales, intelectuales y muchos otros fue

---

[4] El día 20 de junio, mientras la Asamblea Nacional debatía una moción para derogar el estado de excepción establecido el 17 de junio, el gobierno derogó ese decreto y envío uno nuevo, en el que se prohíbe la libertad de reunión o asociación en espacios públicos, pero acepta «las manifestaciones pacíficas» y amplía el estado de excepción a las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. De esa manera, la Asamblea no podía tratar algo que no existía.

inmediato; decenas de personas se congregaron en sus alrededores para condenar la infamia. Apelando a la figura de la «requisición», durante los días subsiguientes convirtieron al edificio de la CCE en un cuartel policial.

Es sabido que el Ágora de la Casa de la Cultura y el parque El Arbolito se han convertido en símbolo de la lucha y resistencia del movimiento indígena, han sido lugar de hospedaje y de asambleas y reuniones; el gobierno buscaba privar al movimiento indígena de ese punto referencial y crear dificultades para su permanencia en la ciudad. La medida no tuvo su efecto, cinco días después el ágora fue ocupada por los manifestantes.

Discurso de la derecha y el gobierno

Articulados con un mismo discurso el gobierno, la derecha y los grandes medios de comunicación desataron una intensa y sistemática ofensiva que tenía como propósito desprestigiar la lucha, quitarle razón, neutralizar el respaldo de la población, provocar una reacción social en contra de los manifestantes y justificar la represión.

En un inicio la campaña señalaba que no existen motivos para la protesta y que el gobierno tenía la disposición de conversar y atender los planteamientos; a medida que el paro tomaba más fuerza el relato gubernamental subía de tono. Hablaron de una confrontación entre golpistas y defensores de la democracia, de un movimiento violento y desestabilizador, financiado por el narcotráfico y el crimen organizado, y que operaban grupos terroristas. Las cabezas más visibles de esta campaña en el entorno gubernamental fueron el ministro del Interior, Patricio Carrillo, el ministro de Defensa, Luis Lara, el director del centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo, el consejero presidencial Diego Ordóñez y, por supuesto, el mismo presidente Lasso.

El agente de la CIA y exdirector de inteligencia del Ejército, coronel Mario Pazmiño, fue y sigue siendo uno de los más activos difusores de esta campaña.

La visión colonialista de las élites más reaccionarias se manifestó en los ataques racistas en contra del movimiento indígena. Detrás de la frase «váyanse a sus páramos», utilizada de manera despectiva, se expresa un criterio discriminatorio y segregacionista. El racismo no solo tiene ese tipo de concepciones, mantiene mecanismos de categorización y de exclusión para ejercer el poder sobre los sectores subalternos; se apoya en prácticas autoritarias para garantizar el *statu quo,* naturaliza las formas de opresión y justifica todo cuanto sirva para mantener la desigualdad. Los prejuicios coloniales sobre los indígenas, como que son «vagos» y son pobres porque «no les gusta trabajar» están en la línea de legitimar los privilegios de la clase dominante.

La exacerbación de un discurso racista es, de por sí, un asunto complejo y peligroso, incuba la posibilidad de que detrás o junto a este aparezcan estructuras políticas filo fascistas. Es una advertencia que debe ser tenida en cuenta.

La derecha trabajó también por articular un movimiento social en contra del paro, en varias provincias los empresarios se pusieron a la cabeza de la convocatoria de las denominadas «marchas blancas» —en las que abundaban los criterios de odio y racismo—, que tomaron como consigna la «búsqueda de la paz». No tuvieron la magnitud que sus organizadores esperaban, pero tuvieron presencia en varias provincias, en Quito fueron de menos a más. En la capital se presentaron dos o tres episodios que deben alertarnos, jóvenes de familias acomodadas desde sus autos dispararon armas en contra de quienes protestaban en la calle. Sobre esto, la prensa burguesa mantuvo un total hermetismo, los hechos fueron conocidos a través de las redes sociales.

La confrontación en el terreno de la comunicación tuvo su propio espacio y fue fundamental. En un importante nivel, los medios alternativos lograron contrarrestar el discurso oficial y exponer el real desenvolvimiento de la lucha. A través de estos y de las redes sociales la población constató la brutalidad de la represión policial, el arrojo y la valentía de los combatientes de la primera línea, el desenvolvimiento de la lucha tanto en la capital como en los sitios más lejanos, las acciones de solidaridad, recibían información e informaban el

desarrollo de los acontecimientos. La comunicación popular desbarató las mentiras y las falsas acusaciones de los funcionarios gubernamentales y jefes policiales, como en el caso de Byron Guatatuca, joven kichwa asesinado en Puyo. Los jefes policiales dijeron que murió por mala utilización de materiales explosivos, pero los videos que circularon en las redes mostraron el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por la Policía que se alojó en su cráneo y lo mató de manera instantánea.

La contraposición de información, de narrativas, de análisis respecto de lo que estaba ocurriendo en el país, era expresión de una aguda confrontación ideológica.

Primero que hablen los fusiles

La supuesta voluntad del gobierno para dialogar nunca estuvo acompañada de acciones concretas para que este se efectivice, salvo en los últimos días. El discurso del diálogo fue utilizado para enmascarar su decisión de enfrentar el paro con represión y calculando que, con el transcurrir de los días, el cansancio y la incertidumbre cunda entre los manifestantes.

Ninguna de las medidas y acciones adoptadas por el gobierno y los aparatos represivos para sofocar el paro dieron resultado. La lucha popular sobrepasó las declaratorias de estados de excepción, los operativos del Ejército y la Policía fueron enfrentados y en varias sitios y ocasiones los manifestantes se impusieron sobre las fuerzas represivas. El pueblo resistió y triunfó.

El aparato utilizado para reprimir fue enorme: militares, cuerpos especiales de la Policía, tanquetas antimotines, caballería, perros, equipos motorizados, helicópteros, agentes de civil, bombas de gases lacrimógenos, cartuchos de perdigones y balas de plomo.

En Quito, la Universidad Central, la Universidad Salesiana, la Escuela Politécnica Nacional, destinadas como lugares de acogida y ayuda humanitaria, fueron atacadas por las fuerzas policiales, al igual que la Universidad Católica. Eso motivó que la Defensoría del Pueblo emita una resolución en la que solicita que los policía y militares no ingresen a las universidades del país, sin embargo, los ataques continuaron, horas después de que la Defensoría del Pueblo haga ese pedido, la Policía lanzó bombas lacrimógenas al interior de la UCE.

Los efectivos policiales actuaron con saña en contra de los manifestantes. En el Informe Preliminar presentado por la «Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos», que estuvo en el país durante el paro, se habla de testimonios desgarradores que denuncian la violencia represiva. «Especialmente integrantes del cuerpo de elite UMO (Unidad de Mantenimiento del Orden), dispararon directamente al rostro, de manera horizontal, a corta distancia, con el claro objetivo de matar. […] trato cruel dispensado a los detenidos que incluye tormentos, malos tratos, inhumanos o degradantes, configuran especiales vulneraciones dirigidas a menoscabar la propia condición humana.».[5]

Las fuerzas represivas actuaron con impunidad, con carta blanca otorgada por el presidente Lasso. El 24 de junio fue uno de los días en el que la represión policial actuó con mayor brutalidad en Quito, se registraron más de cien heridos en el sector del parque El Ejido, decenas de detenidos, niños y niñas desaparecidas, mujeres ahogadas por el gas. Ese mismo día, en la noche, en uno de los salones de Carondelet, Lasso y los jefes militares y policiales se felicitaban mutuamente por la hazaña del día, y en un tuit exaltaba la violencia represiva: «…agradezco su valentía e ímpetu con el que defienden a cada hombre, mujer y niño del Ecuador. Mi total respaldo a la labor que desempeñan por regresar la tranquilidad del país»

El saldo de la represión no es posible precisarlo con exactitud, porque las fuerzas operaron en todo lado, no solo en las ciudades en donde hubo las mayores concentraciones y movilizaciones de masas, reprimieron también a grupos pequeños en zonas rurales, bombardearon con gases casas donde permanecían niños, escuelas, golpearon a quienes se manifestaban en carreteras, a pasajeros de transporte público, a gente que desde veredas aplaudía la lucha. Se reconoce que

[5] https://drive.google.com/file/d/1K96tbkLhVWcGvAEkxB9IMwBl_bGN90lM/view

al menos hubo seis personas fallecidas por acción de las fuerzas represivas y más de 500 heridas. Como ocurrió en el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019, también ahora, el general Patricio Carrillo lleva sobre su espalda la principal responsabilidad de estos sucesos, por los crímenes provocados en octubre de 2019, sobre él pesa una acusación de crímenes de lesa humanidad.

El punto más alto de la lucha

Al cabo de diez días, la lucha creció en extensión e intensidad, provincias como Imbabura, Cotopaxi, Pastaza y Chimborazo permanecían totalmente paralizadas, en todo el país se producían manifestaciones de protesta en las zonas urbanas y rurales, decenas de pozos petroleros dejaron de producir, escaseaban los alimentos y los combustibles en el mercado, choferes de camiones, buses, busetas, taxistas se unieron a la protesta en varias provincias, los empresarios se quejaban de las pérdidas que producía la paralización y exigían que se la ponga fin. El movimiento llegaba a su pico más alto y el gobierno estaba acorralado.

En las movilizaciones se esparce y toma fuerza la consigna ¡Fuera Lasso, gobierno popular!; el grado de descontento de la población y el desprestigio del gobierno son altos, según sondeos de opinión —en esos días— la desaprobación a su gestión bordeaba el 80%. La lucha alcanza una connotación política, la confrontación pueblo–gobierno, pueblo–clase dominante es clara, el país está polariza en torno al paro.

Esta circunstancia es aprovechada por el correísmo (UNES) y propone que la Asamblea debata un pedido de adelanto de las elecciones (muerte cruzada), en correspondencia con lo que establece el artículo 130.2 de la Constitución: «grave crisis y conmoción interna». Se sabía que la moción no alcanzaría los 92 votos mínimos requeridos para su aprobación, pero el correísmo veía la ocasión para identificarse con el sentimiento antigobierno existente en la población y para limpiar su imagen afectada debido a sus acuerdos con el gobierno. Su abstención junto al oficialismo en la Asamblea, cuando se votó una moción para que se archive el proyecto de ley de reforma tributaria, permitió que la propuesta enviada por el gobierno entre en vigor sin ningún cambio; en contraparte, el gobierno habría tenido el compromiso de trabajar para que se revisen procesos judiciales por corrupción que pesan en contra de Rafael Correa, Jorge Glas y otras figuras de sus filas.

La Conaie convocó una Asamblea Popular para el día viernes 24 de junio, a la que son invitadas gremios y organizaciones de trabajadores, maestros, campesinos, estudiantes, pequeños y medianos productores bananeros, arroceros, maiceros…, comunidades, barrios, transportistas, agrupaciones juveniles, de mujeres… Su convocatoria reconocía la composición popular del paro, porque todos esos sectores formaban parte de la lucha, sin esa incorporación el movimiento no habría tenido las connotaciones y dimensiones que alcanzó. El Frente Popular respaldó el llamado, propuso que se organice también en provincias con la participación de todos los sectores que luchan en contra de las políticas neoliberales —incluyendo a las organizaciones políticas democráticas, progresistas y de izquierda—, que sea un espacio en el que todos tengan derecho a opinar y donde sus resoluciones sean fruto del debate colectivo, que todas las organizaciones y participantes actúen en igualdad de condiciones.

A esa Asamblea fueron llamados los legisladores de Pachakutik, asistieron nueve de los 27 que conforman el bloque parlamentario, y recibieron el mandato de sumarse al pedido de que la Asamblea Nacional discuta la destitución del presidente Guillermo Lasso.

La magnitud de la protesta social, el ahondamiento de la crisis política, las presiones que surgen desde algunos sectores de la oligarquía, el fracaso de la medidas coercitivas y represivas para frenar la lucha obligan a Lasso a tender puentes para establecer conversaciones con los dirigentes del movimiento indígena. La salida de la Policía del edificio de la Casa de la Cultura, ocurrido el día jueves 23, fue

un mensaje de «voluntad política» del gobierno para conversar; un día antes, la Conaie, la Fenocin y la Feine emitieron un comunicado público en el que expresan la disposición de dialogar, siempre que «existan las condiciones de buena fe y garantías para su realización», y establecen seis condiciones: cese inmediato de las acciones de represión y criminalización, derogatoria del estado de excepción y garantías de no imponer nuevos decretos en el marco del paro nacional, cese al ataque y respeto de las zonas de resguardo humanitario, que toda la agenda sea puesta en la mesa y no existan puntos inviables para el gobierno, sino esfuerzos para atender el clamor ciudadano. El comunicado termina señalado, «el diálogo que las organizaciones indígenas, sociales y el pueblo queremos, es un diálogo frontal y directo entre los actores involucrados, para lo cual no necesitamos mediadores ni intermediarios, en cambio sí solicitamos veeduría al proceso, por ello pedimos a colectivos, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que sean garantes de este proceso de diálogo…»[6].

Parecía que estaban cerca las negociaciones y un acuerdo entre la Conaie, Fenocin, Feine y el gobierno, que pondría fin a la protesta; sin embargo la salvaje represión que se desató el 23 en la tarde, que

[6] https://drive.google.com/file/d/1OWq0-CG1WAedTqT50QU9nLOA-rmtMYmP/view

provocó la muerte del joven Henry Quezada, heridos, golpeados, asfixiados, niños y niñas desaparecidas, recrudeció los niveles de confrontación y se creó una situación distinta, las posibilidades de sentarse a dialogar se aplazaban. No solo en las inmediaciones de la Asamblea Nacional y el parque El Ejido los choques con la Policía y el Ejército fueron violentos, se peleaba en el centro y sur de la ciudad; en el norte, cerca de la Mitad del Mundo, camiones del ejército que portaban pertrechos para reprimir la protesta fueron atacados por los manifestantes; en las inmediaciones de la Universidad Central hubo provocaciones de la Policía que hizo disparos. Hasta ese día cuatro luchadores populares habían sido asesinados.

La campaña del gobierno para deslegitimar la protesta arreció, se dijo que los dirigentes de la Conaie no querían dialogar, trabajaron por sobredimensionar los problemas de desabastecimiento de productos en los mercados y de insumos médicos, hablaron con más insistencia de un supuesto financiamiento de la lucha con dineros del narcotráfico. Era notorio que en el gobierno se había impuesto el sector más reaccionario, el que apostaba a poner fin a la protesta con bala, gas y cárcel. Al mismo tiempo, la derecha tomó medidas para pasar de la condena a la lucha a las acciones públicas de rechazo, con las denominadas «marchas blancas», se acrecentó el discurso racista y de odio, en este contexto se dan los ataques de civiles armados en contra de los manifestantes. La confrontación de clases estaba absolutamente clara.

El día viernes 24, en la tarde, Guillermo Lasso se dirigió al país, responsabilizó al movimiento indígena de la violencia generada por la Policía el día anterior en Quito y sostuvo que «la intención real» de Iza es el derrocamiento del gobierno y «usurpar a un gobierno legalmente constituido». Frente a eso, anunció que «el Gobierno Nacional utilizará todos los recursos que la ley le faculta para enfrentar a los **vándalos y criminales**. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán […] mediante el uso progresivo de la fuerza, [para garantizar] el orden público y la democracia». No perdió la ocasión para agradecer a la Izquierda Democrática, al Partido Social Cristiano, a la Bancada del Acuerdo Nacional y a asambleístas que «públicamente se han manifestado a favor del orden constituido».

La finalización del mensaje del Presidente significó la orden para que la Policía arremeta de manera salvaje en contra de quienes se encontraban en el Ágora de la Casa de la Cultura —en donde en la mañana se instaló la Asamblea Popular— y en las inmediaciones del

parque El Ejido. «Ya no vamos a repeler sino a reprimir con el uso progresivo de la fuerza. Ya no estamos frente a protestantes por una demanda social sino frente a un grupo de delincuentes», declaró el ministro Patricio Carrillo.

Solo en esa tarde se contabilizó más de un centenar de heridos; médicos, estudiantes de medicina y voluntarios que cumplían acciones de socorro en la protesta organizaron un cordón humanitario para proteger a cientos de mujeres, niños, hombres que fueron emboscados por la Policía y el Ejército, evitando así que continúen apaleando, acanallando y deteniendo a la gente. En las redes sociales se generalizó el llamado urgente ¡Paren la masacre!

El gobierno celebró el operativo como una victoria política y anunció el éxodo de los manifestantes a sus provincias. Lo sucedido esa tarde afectó anímicamente a la gente que, además, sentía cansancio por casi dos semanas de lucha. Los días sábado y domingo subsiguientes el nivel de la protesta disminuyó en la capital, pero no desapareció, fueron dedicados a reponer fuerzas y a realizar asambleas por comunidades, para analizar la situación y acordar nuevas acciones. Ese sábado se realizó una movilización de mujeres para rechazar la violencia criminal del Estado, dejaron claro que la lucha continuará hasta que el gobierno se siente a dialogar y atienda los 10 puntos de la plataforma de lucha.

Los combates finales

Desde una posición de fuerza, el domingo 26, en la noche, Lasso formuló un nuevo anuncio que se resume en tres aspectos: mantiene su decisión de imponer mano dura, judicializar a quienes protesten, de manera particular a los dirigentes; recrudecerá la represión mediante la aplicación del uso progresivo de la fuerza; y, decide la disminución de 10 ctvs. en el precio de la gasolina y el diésel. Voceros del gobierno señalaron que, con ese anuncio, ya no hay motivos para continuar con el paro, que el «esfuerzo» del Estado costará 260 millones de dólares, que sumado a lo que anunció una semana antes habría un gasto de 600 millones de dólares.

Inmediatamente se produjo la respuesta de varias organizaciones populares y políticas. La Juventud Revolucionaria del Ecuador, Unidad Popular y el Frente Popular coincidieron en señalar que la lucha del pueblo es por más, que el gobierno debe dar respuesta a toda la plataforma presentada; la Conaie demoró en hacer pública su opinión, calificó como insuficiente e insensible la rebaja, que no se compadece

con la situación de pobreza que vive el pueblo y también insistió en que se atienda toda la plataforma.

No obstante que, como lo dijimos, el anuncio lo hizo desde una posición de fuerza, no era difícil entender que el gobierno sabía que estaba en la obligación de ceder algo en un tema que lo tenía como intocable y que era el que más interés provocaba en la población. A esa altura, adicionando los anuncios del 17 de junio, ya eran cinco los puntos sobre los que se vio forzado a dar respuestas. Eran logros de la lucha, pero la decisión de las bases fue continuar en el paro hasta que haya una atención a toda la plataforma y que la disminución del precio de los combustibles sea mayor.

Mientras tanto, el debate para dar paso a la denominada muerte cruzada inició el día sábado 25 en la tarde. En algunos sectores se levantaron muchas expectativas de su resultado. Lasso envió a un representante y jugó una nueva maniobra: para quitar sustento al pedido de juicio, anunció la derogatoria del estado de excepción «por grave conmoción interna». Tres días después la Asamblea tomó una decisión, 80 legisladores votaron a favor, 48 en contra, 9 abstenciones. Votaron para salvar a la Lasso un sector de la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, la bancada del Acuerdo Nacional; algunos legisladores de Pachakutik y de la ID se abstuvieron, con lo cual expresaban su apoyo al Gobierno. «No podía esperarse otra cosa de una Asamblea que, salvo pocos asambleístas, no representa los intereses de los trabajadores y el pueblo; no han botado a Lasso, pero la mayoría del pueblo ha gritado en todo el país ¡Fuera Lasso! Con este resultado, el presidente de la República no puede sentirse victorioso, porque apenas 48 asambleístas votaron a su favor, pero más allá de eso, millones de ecuatorianos lo repudian y lo han demostrado durante este levantamiento indígena y popular», decía el editorial de En Marcha, edición 2007.[7]

La gente continuó llegando a Quito, el fin de semana se produjo un relevo de fuerzas. La noticia de la brutal represión de los días anteriores enardeció los ánimos y se alistaron nuevos contingentes para ir a la capital. El lunes 27, las protestas tuvieron un nuevo impulso en todo el país. A las provincias que desde los días anteriores estaban paralizadas, se sumó Azuay. El gobierno y la prensa burguesas trabajaron el fin de semana para crear la idea de que la gente abandonó la pelea y que, por lo tanto, el movimiento estaba derrotado, pero los

[7] https://www.pcmle.org/EM/spip.php?article11913

hechos demostraban una situación distinta, el movimiento iba retomando la iniciativa.

Con el pueblo peleando en las calles y carreteras, inician las conversaciones entre el gobierno y los dirigentes de la Conaie, Fenocin y Feine, Este primer encuentro termina con resultados positivos para el movimiento, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que se derogará el decreto 95, que hace referencia a la ampliación de la frontera extractiva o minera, también anunció el compromiso de introducir cambios en el decreto 151, que contiene la política minera del gobierno. Específicamente, la reforma iría en el sentido de eliminar las facultades del Presidente, «bajo condiciones excepcionales», para solicitar actividad extractiva de recursos naturales en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, además, no se permitirá nuevos proyectos de actividad extractiva de recursos naturales en ese tipo de áreas. Respecto del precio de los combustibles, hubo el ofrecimiento de focalizar un nuevo precio.

Los sucesos ocurridos en la madrugada del martes 28, en Shushufindi, sirvieron de pretexto para que el gobierno rompa el diálogo. La población se enfrentó a miembros del ejército y la policía que custodiaban un convoy de 17 tanqueros con combustible, que se dirigía hacia el bloque petrolero ITT, en el choque falleció un militar y hubo varios heridos. Durante todos los días del paro la población mantuvo el control de esa vía sin que se produzcan actos de violencia. No hay duda que se trató de una provocación de la fuerza pública.

Con un tono autoritario y amenazante, Lasso dijo que no volverán a sentarse a dialogar con Leonidas Iza, porque «no se puede dialogar con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos».

La Fiscalía entró al juego del gobierno y activó más de 260 investigaciones por rebelión, terrorismo, paralización de servicios públicos, extorsión.

Nuevamente el gobierno apostaba a que el cansancio de los luchadores populares y de la población y la represión obligue la finalización del paro, sin embargo la protesta se mantuvo, por ello, el día 29 de junio se decretó un nuevo estado de excepción, esta vez en Imbabura, Azuay, Sucumbíos y Orellana, en las tres últimas provincias también regiría un toque de queda. El gobernador de Morona Santiago, Freddy Villamagua, renunció a su cargo, a cambio fue liberado el gerente provincial de BanEcuador, que permanecía retenido por los manifestantes.

El ministro de Gobierno hizo conocer que el gobierno aceptaba la intervención de la Conferencia Episcopal en los diálogos, después, Iza confirmó que los dirigentes del movimiento indígena también participarán. Luego de 18 días de lucha en todo el país, el 30 de junio, se suscribió un «Acta de Paz» y el movimiento indígena y popular conquistó una gran victoria. El Ejecutivo aceptó:

- Disminución en 15 ctvs. del precio del galón de gasolina y de diésel, y discutir un proceso de focalización de un subsidio para sectores campesinos, transportistas, pescadores y otros.
- Derogatoria del Decreto 95. No se ampliará la frontera petrolera para proteger los territorios y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
- Reformar el Decreto 151, para prohibir la minería en áreas protegidas y territorios ancestrales; zonas declaradas intangibles; zonas arqueológicas; áreas de protección hídrica; se garantizará la consulta previa, libre e informada en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.
- Fortalecimiento de los operativos y mecanismos de control de precios para enfrentar la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad (decreto 452)
- Se declara en emergencia el sistema de salud pública (decreto 454).
- El denominado Bono de Desarrollo Humano subirá de USD 50 a USD 55

- Subsidio del 50% en el precio de la urea para pequeños y medianos productores.
- Reducción de la tasa de interés del 10% al 5% en los créditos de hasta USD 3.000 que otorga BanEcuador.
- Los préstamos vencidos de hasta USD 3.000 con la misma institución serán condonado.
- USD 100 millones más para créditos productivos, que serán de USD 20.000 a 10 años plazo y a 5% de interés anual.
- Se elaborará un proyecto de Ley reformatoria al artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

Como parte de los acuerdos se establecieron mesas técnicas de discusión, con la responsabilidad de fijar los mecanismos de ejecución de los acuerdos, en un plazo de 90 días.

Bases para la victoria

Diferentes factores y circunstancias permitieron que esta jornada alcance la victoria, entre los que citamos la masividad, combatividad, la unidad en la acción de los distintos sectores populares actuantes, su cobertura en todo el país, el contenido de la plataforma de lucha, una acertada conducción política, la concentración de fuerzas en la capital, la existencia de un gobierno debilitado políticamente, el impacto que tuvo en la economía del país y la afectación a las ganancias

de poderosos grupos económicos, los días de duración, la solidaridad activa y la simpatía de amplios sectores de la población.

Las luchas del movimiento indígena ecuatoriano se han caracterizado por su masividad. En eso, la organización social comunal cumple un papel trascendente, todo lo que tiene que ver con la vida de la comunidad se resuelve de manera colectiva, todo lo acordado se ejecuta colectivamente. El primer levantamiento indígena, en 1990, ya puso en evidencia esa participación masiva de jóvenes, mujeres, madres con sus hijos, adultos; desde entonces hasta hoy, el movimiento indígena se ha ido fortaleciendo y afirmando como un actor social que no puede ser obviado a la hora de definir las políticas estatales, ni en el desenvolvimiento diario de la sociedad ecuatoriana, pues, se ha desarrollado también como un actor político fuerte.

La lucha de resistencia del movimiento indígena no se circunscribe a proteger sus elementos culturales, que en sí es una tarea histórica dura y enorme, es una batalla por alcanzar su reconocimiento como pueblos y nacionalidades indígenas con los mismos derechos y opciones de la nación mestiza, en el marco de un Estado plurinacional, es una lucha por superar la condición de pueblos oprimidos. Esta idea se ha ido desarrollando al nivel de conciencia social y es uno de los elementos fuerza que motiva su accionar. Claro que luchan por agua de riego, por precios justos para sus productos, por créditos para producir, en defensa de sus tierras y territorios, por educación para sus hijos, y al luchar por ello están precautelando su propia existencia como pueblos.

Protagonistas de la lucha

La participación conjunta de la Conaie (y sus filiales), la Fenocin y la Feine hizo posible que el frente de lucha se amplíe, situación no presente en anteriores levantamientos, en los que la Conaie siempre cuidó mantener el protagonismo dentro del movimiento indígena. A estas fuerzas convocantes, desde el primer día se unieron otros sectores sociales, de manera particular las organizaciones integrantes del Frente Popular, la militancia de Unidad Popular, nuestra militancia, diversas organizaciones de mujeres, poblacionales, sindicales, campesinas.

La cobertura nacional fue posible gracias a la conjunción de esas fuerzas en la acción. En la mayoría de provincias, las organizaciones del Frente Popular sostuvieron la lucha en las ciudades y en Quito, en donde el movimiento indígena concentró efectivos, los estudiantes

universitarios y secundarios, los maestros, integrantes de organizaciones de mujeres y feministas, artistas, jóvenes sin empleo se confundían entre los combatientes de la calle.

Particularmente en la costa, la débil presencia del movimiento indígena fue cubierta por el Frente Popular. Las mayores acciones que se hicieron en varios puntos en la provincia del Guayas, y por supuesto en Guayaquil, fueron cumplidas por los integrantes de la UNE, Feunassc, CUBE, UP, JRE, FESE, FEUE, Mujeres por el Cambio; cosa similar ocurrió en Esmeraldas, Sto. Domingo, Manabí, Los Ríos, Sta. Elena, El Oro, en la que también se incorporaron los productores bananeros.

El magisterio, convocado por la UNE, dio un particular aporte para el desarrollo de la lucha en todo el país, puesto que su demanda particular por la homologación salarial la insertaron como parte del paro indígena y popular; los plantones, mítines, marchas que hicieron durante esos días con ese propósito, contribuyeron a jalonar la protesta en las ciudades. Eso pudo verse en las jornadas del 16 y 22 de junio, esta última convocada por el FUT y el Frente Popular.

Nuevamente se evidenció que los contingentes más robustos del movimiento popular de nuestro país lo constituyen el movimiento indígena y las fuerzas del Frente Popular; evidentemente, el protagonismo y la fuerza fundamental está en el movimiento indígena.

Combatividad para enfrentar la violencia del Estado

La masividad de la lucha estuvo acompañada por la combatividad. El movimiento de masas ha tenido un aprendizaje de sus propios combates y eso se expresó en la lucha de calles, en la construcción de barricadas, la utilización de mecanismos e instrumentos de protección y autodefensa, las acciones de masas en las ciudades, la toma de gobernaciones e instituciones, el cierre de vías principales para afectar el aparato productivo, el bloqueo de ciudades tomando puntos claves, la organización de relevos, el montaje de la logística para sostener a los combatientes en la capital.

Esta jornada fue un nuevo momento de aprendizaje para todos, para quienes estuvieron en la primera línea, en los equipos de primeros auxilios, para quienes trabajaron en la comunicación y propaganda, para quienes participaron en las marchas masivas y corte de vías, para los que trabajaron atendiendo en los centros de acogida, para la gente que dio su aporte solidario para el hospedaje, alimentación y cuidado médico. Miles de personas participaron por primera vez en estas acciones de calle, miles también enfrentaron por primera vez una fuerza represiva como la que actuó, ahora están en condiciones de transmitir su experiencia para nuevas luchas.

El gobierno, los jefes policiales y militares, los medios de comunicación burguesa se escandalizaron y quisieron escandalizar al país por la presencia de la «Primera Línea» y la «Guardia Indígena», dijeron que aplicaban formaciones militares en la lucha, que eran comandos guerrilleros y hasta que había la presencia de organizaciones insurgentes de otros países. Lo cierto es que la lucha enseña, y nuestro pueblo ha aprendido a pelear y enfrentar la represión, no está dispuesto a enfrentarse inerme a un aparato represivo que quiere escarmentar a quienes protestan. La guardia indígena es una organización natural en las comunidades, para su protección ante la delincuencia, ahora cumplieron el papel de cuidar a sus hermanos y hermanas. Para la mayoría de quienes estuvieron en la primera línea, este fue su bautizo como combatientes.

Hay elementos muy importantes de organización para la pelea, no solo de los combatientes, sino de la lucha de masas. La forma cómo se desenvolvió esta jornada, lo ocurrido durante esos días expresa elementos de lo que es la concepción marxista de la guerra del pueblo.

La fuerza de la juventud y de las mujeres

Quienes imprimieron combatividad a la lucha, dieron ejemplo de valentía y hasta de heroísmo, fueron hombres y mujeres jóvenes que vinieron con sus comunidades indígenas, otros que viven en las ciudades pero que no se desprenden de su condición nacional y combaten por su pueblo, estudiantes secundarios y universitarios, desempleados, artistas. Entre esos miles de jóvenes de la ciudad y el campo estuvieron nuestros militantes, los compañeros de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, de la FESE y de la FEUE, de Unidad Popular.

La juventud ecuatoriana siempre se ha caracterizado por su sensibilidad social, por su disposición para unirse a la lucha en contra de las políticas antipopulares de los distintos gobiernos, para defender sus derechos y los del pueblo; los jóvenes son víctimas de la opresión y explotación de este sistema, que no les brinda nada más que incertidumbre, desesperanza, les niega educación y trabajo y les obliga a huir del país buscando opciones en otras latitudes, donde tampoco las encuentra. La juventud ecuatoriana siempre pelea en la primera línea.

Se repitió el protagonismo que las mujeres tuvieron en jornadas anteriores, no es posible concebir un levantamiento popular sin su presencia. Lasso dijo que fueron utilizadas cuando encabezaban las marchas y que los niños también fueron utilizados; no solo lo dijo por desconocimiento de la cultura indígena, sino porque desde una posición patriarcal y machista intentaba desprestigiar a los dirigentes del movimiento.

En medio de los obstáculos que enfrentan, como las casi nulas oportunidades de acceso al mercado laboral, las dificultades económicas y geográficas para acceder a servicios como educación y salud, la marginación y otros aspectos, las mujeres indígenas desempeñan un rol decisivo en la lucha de resistencia y por la autodeterminación de sus pueblos, son garantes de la cultura y juegan un papel fundamental en sus familias y en la comunidad.

El protagonismo de las mujeres indígenas en el paro no está determinado por su masiva participación, sino por la forma como actuaron: debatiendo en las asambleas y siendo parte de sus resoluciones, enfrentando a las fuerzas represivas, asumiendo responsabilidades de dirección del movimiento, en el trabajo de comunicación, en la logística.

En el movimiento popular organizado se observa un mayor protagonismo de las mujeres, se han abierto y ganado espacios por sus propias capacidades y cualidades. Varias organizaciones sindicales, estudiantiles, del magisterio, campesinas, indígenas, poblacionales, de comerciantes minoristas, a nivel nacional y local, las tienen como dirigentes principales; su presencia en las acciones y en las jornadas de lucha de distintos sectores sociales tiene un evidente crecimiento y el movimiento de mujeres, por sus particulares reivindicaciones, experimenta un notable desarrollo en los últimos años.

Razones para luchar

El rápido respaldo que distintos sectores dieron al paro y su incorporación a la lucha obedeció al enorme descontento que la población tiene con el gobierno, porque sus condiciones de vida se han deteriorado aún más en los últimos años. La aplicación de las políticas neoliberales y los efectos de la crisis capitalista en el país, han provocado un acelerado empobrecimiento de la población. El llamado al paro fue la oportunidad para expresar su insatisfacción y rebeldía.

Los diez puntos de la plataforma de lucha recogían reivindicaciones específicas para el movimiento indígena y para los campesinos, demandas de interés general (como el tema minero y petrolero), pero al que la población le vio como el punto central o más importante fue el de la disminución del precio de los combustibles. Los resultados de una encuesta, publicada un mes después del paro, mostraban que el 54,88% de la población consideraba que las razones que motivaron la convocatoria al paro fue el precio de los combustibles,

y el 39,78% dijo que se debía al alto costo de la vida y a la mala economía; apenas el 4,41% consideraba que fue por política o interés personal, demostrándose que, en este aspecto, el discurso del gobierno no tuvo asidero. De manera aún más específica, ante la pregunta de cuáles fueron las principales demandas del paro, el 72,37% respondió bajar los precios de los combustibles, el 19,08% el alto costo de la vida. Las demandas del paro se identificaban con el sentimiento y el estado de ánimo de millones de ecuatorianos.

La plataforma de lucha cuestionaba la política del gobierno y de las facciones burguesas neoliberales, el paro fue una respuesta a la agudización de la crisis, los resultados alcanzados significaron una derrota política del gobierno, un golpe a la política fondomonetarista.

La plata sale del pueblo

Esta lucha fue sostenida por las masas en todos los aspectos. El gobierno y los reaccionarios de todo pelaje hacen cálculos e insisten una y otra vez que el dinero del narcotráfico financió el paro, pero no lo han demostrado ni lo podrán demostrar.

Entre las muchas enseñanzas que el paro dejó, el sentido de solidaridad ocupa un lugar especial. No cabe en las mentes de la burguesía, especializadas en ver cómo obtener ganancia en todo, que un pueblo pobre entregue una parte de lo poco que tiene para sostener la

lucha. Comunidades campesinas, organizaciones barriales, comerciantes de los mercados, organizaciones estudiantiles, grupos de mujeres, familias y personas individualmente contribuyeron con alimentos, vituallas, medicinas, colchones, cobijas, ropa y todo lo que la permanencia de la gente en Quito demandaba.

El cuidado de las niñas y niños, la alimentación, la atención médica, el socorro y los primeros auxilios en las movilizaciones fueron cubiertos todo el tiempo por profesionales, estudiantes y jóvenes voluntarios, que entendieron que esas acciones ayudaban a sostener el combate, que esa era su trinchera de lucha.

El pueblo labró la victoria

El paro indígena y popular culminó con una importante victoria, los esfuerzos del gobierno y su aparato represivo, de los dueños del gran capital, de los medios de comunicación burgueses no pudieron aislar al movimiento de masas y derrotarlo, como era su objetivo; la fuerza, la unidad, la organización, la lucha de miles de hombres y mujeres, jóvenes y adultos, arrinconó al gobierno y lo derrotó.

En las esferas gubernamentales calculan que cubrir las demandas del paro significaría alrededor de mil millones de dólares, no es poco, pero tampoco es suficiente para atender todas las demandas y necesidades insatisfechas. No lo harán con gusto, sino forzados; en su concepción política, esos recursos deberían ser canalizados para el pago de la deuda externa o para proyectos en los que el gran capital internacional sea beneficiado. Hay que permanecer atentos para que el gobierno cumpla con lo que se comprometió y para que los beneficios de los programas y acciones planteadas lleguen a los que más necesitan.

El paro cosechó victorias en otros ámbitos fundamentales, con connotación estratégica para la revolución ecuatoriana. El movimiento indígena y popular salió fortalecido en organización, en experiencia política, en sus capacidades y habilidades para la lucha. Durante esos 18 días, la lucha de clases estuvo visiblemente al centro de la vida política del país; la gente sencilla de nuestro pueblo vio y reconoció quiénes son parte de su combate, quiénes están a su lado y pelean juntos por necesidades y reivindicaciones comunes, vio también en una orilla distinta a quienes tenían todo el apoyo de la institucionalidad burguesa para sofocar la lucha y los trataban con odio y desprecio.

Los trabajadores, la juventud, los pueblos del Ecuador avanzaron mucho en el desarrollo de su conciencia política, en el reconocimiento de que la sociedad está dividida entre pobres y ricos, explotados y explotadores que —para afirmar su dominación de clase— tienen a su servicio el gobierno, los aparatos de represión, los grandes medios de comunicación, las leyes y los órganos de justicia.

En la conciencia del pueblo se ha reafirmado la idea que los derechos se los consigue peleando, que la lucha da frutos cuando ésta posee fuerza, con esa convicción se dispone a levantar nuevos combates, pues, las necesidades de las masas son muchas.

En el país se ha producido un cambio en la correlación de fuerzas sociales y políticas, el movimiento popular organizado se ha puesto en un nuevo nivel, el movimiento indígena gana prestigio y confianza entre la población, hay una promoción de liderazgos desde el movimiento indígena y popular, la organizaciones de izquierda han ganado prestigio; toda la institucionalidad burguesa ha quedado golpeada, el desprestigio del gobierno es mayor, al igual que el de la Asamblea Nacional, de los órganos de justicia, de los grandes medios de comunicación y de los partidos políticos de la burguesía.

Las fuerzas revolucionarias tenemos un terreno abonado para trabajar con esas decenas de miles de combatientes, para llevar a ellos nuestra política, para difundir de manera más amplia e insistente las ideas de la revolución y el socialismo entre las masas.

La crisis del país no ha sido resuelta, la crisis del capitalismo persiste, nuevos combates nos esperan.

Agosto 2022

Anexos

Política de la zanahoria y el garrote

Parece que el gobierno intenta aplicar la política conocida como de «la zanahoria y el garrote». Ante el anuncio de acciones de protesta, que se realizarán en los próximos días, convocadas por varias organizaciones sindicales y populares, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, «reitera la disposición al diálogo», mientras al mismo tiempo el ministro del Interior, Patricio Carrillo, advierte una dura represión a lo que él califica como «secuestros a policías y militares, saqueos», que se producirían durante las protestas. El aparato represivo está a punto y, de lo que se conoce, estrenarán equipos nuevos. Para tanquetas antimotines y bombas lacrimógenas hay dinero suficiente, no así para la salud y la educación.

Hablar de disposición al diálogo, por parte del gobierno, es una tomadura de pelo, por decir lo menos. Lasso y su grupo creen que dialogar es invitar a dirigentes del movimiento popular —y no siempre verdaderos representantes de este— para decirles lo que el gobierno tiene pensado hacer y negarse a recoger las opiniones que los dirigentes populares exponen. Hace meses se formaron comisiones para debatir el tema laboral y luego para analizar la problemática de la seguridad social, pero nada positivo para los trabajadores y el pueblo surgen de allí, al punto que, por ejemplo, el Frente Unitario de Trabajadores decidió retirarse de esas «mesas de trabajo».

Entre los puntos de vista del gobierno y del movimiento popular organizado, sobre los diversos asuntos de orden económico, social y político, hay una enorme y marcada diferencia, Lasso representa los intereses de la gran burguesía y el capital monopolista internacional, que están en total contradicción con las necesidades y aspiraciones de los trabajadores y el pueblo. Tan distanciados están esos intereses que el ministro Carrillo no ha tenido ningún reparo en advertir que las voces de protesta serán acalladas con garrote y bala.

Así se entiende por qué tanto interés y urgencia en la aprobación de la ley de uso progresivo de la fuerza. Se la justificó por la ola de violencia delincuencial que vive el país, pero todos entienden que su propósito fundamental es para legalizar la represión brutal en contra de las protestas populares.

Con ley o sin ley, el ministro Carrillo es experto en llevar la tropa para que dispare a mansalva, no hay que olvidar que sobre él pesa

una denuncia por delitos de lesa humanidad, pues, fue el responsable directo de la represión desatada en contra del levantamiento indígena-popular de octubre de 2019.

Editorial del semanario En Marcha
Edición 2005, del 15 al 21 de junio

¡Fuera Lasso, gobierno popular!

Un nuevo levantamiento indígena-popular se produce en el Ecuador. Decenas de miles de indígenas, trabajadores, campesinos, jóvenes, estudiantes, mujeres, pobladores de barrios populares, desempleados, comerciantes de mercados y de la calle, protestan en todo el país, porque no es posible continuar soportando la carestía de la vida, la pobreza, el hambre que acecha a sus hogares, la falta de empleo, los bajos salarios, la imposibilidad de acceder a la salud y a la educación.

La crisis que desde hace meses vive el país en todos los órdenes, tiene hoy un elemento cualitativamente nuevo, el protagonismo de las masas en las calles, que se ha convertido en el elemento principal en el actual escenario político. La contradicción pueblo-gobierno se ha tensado al punto que, junto a las demandas iniciales que motivaron la lucha de las masas, hoy se pide la salida del presidente. ¡Fuera Lasso, gobierno popular! retumba en todo el país.

El ascenso de la lucha de las masas ha quebrado, en los hechos, el estado de excepción decretado por el gobierno para frenar la protesta. La movilización de numerosas tropas del Ejército y de la Policía no ha podido detener las acciones de lucha repartidas en todas las provincias y el avance de contingentes de hombres y mujeres que llegan a Quito. La amenaza no surte efecto cuando la conciencia y el coraje se juntan; la experiencia de otros combates permite enfrentar en mejores condiciones a las fuerzas represivas y sortear sus ataques y cercos.

La lucha está haciendo retroceder al gobierno. De una postura inicial de que «aquí no pasa nada y no hay motivo para la protesta», forzado ha adoptado algunas medidas —como la declaratoria de la salud en emergencia o la elevación del presupuesto para la educación intercultural bilingüe— y anunciar otras que se quedan en ofrecimientos, nada más. Pensó que eso era suficiente para desmovilizar la protesta, pero una vez más se equivocó: la lucha creció, en la convicción de que sí es posible conquistar una victoria mayor.

El pueblo está acorralando al gobierno, está enfrentando los efectos de la aplicación de la política neoliberal —y al mismo neoliberalismo—, que es el credo económico-político de las facciones burguesas más poderosas del país, enfrenta a su vez los efectos de la explotación y opresión que ejerce el capitalismo.

Hay en nuestro país un pueblo que se levanta, que escribe la historia con su lucha, que forja la unidad de los explotados y oprimidos combatiendo al gobierno que representa a los intereses de los dueños del gran capital. El pueblo está labrando una nueva victoria.

Editorial del semanario En Marcha
Edición 2006, del 22 al 28 de junio

Que se atienda la plataforma de lucha

Ayer, jueves, el movimiento indígena se tomó el Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito, que, en el curso de años de luchas, se ha convertido en un símbolo de resistencia y combate de los pueblos. El gobierno, al controlarla militarmente los días pasados, intentó impedir que el movimiento cuente con un sitio de acogida y paz y, a su vez, evidenciar ante el país que estaba dispuesto a impedir que la protesta se mantenga. La Policía debió abandonar toda la zona, la lucha indígena y popular ha conquistado una victoria.

El retiro de las fuerzas represivas, dicen, es una señal de la voluntad del gobierno para dialogar. Mucho ha jugado Lasso en estos días con el discurso de sentarse a conversar, mientras, al mismo tiempo, la Policía y el Ejército han llenado de gases las calles y carreteras y hasta han cobrado la vida de cuatro luchadores populares en medio de centenares de heridos y golpeados. El gobierno nunca ha tenido una disposición seria para discutir con las organizaciones populares y escuchar sus planteamientos; así como los gobernantes que le antecedieron, Lasso cree que dialogar es convocar a los dirigentes de las organizaciones populares para que en un monólogo le escuchen y suscriban lo que él tiene pensado hacer.

En varias ocasiones, los dirigentes de las centrales sindicales, del movimiento indígena y de otras organizaciones populares, han señalado que no le corren al diálogo con el gobierno, pero tampoco están dispuestos a ser utilizados para su propaganda. Si nos sentamos a conversar —han dicho— es para que se recojan las propuestas que las organizaciones populares tienen sobre el manejo económico y político del país, y no para hablar con las paredes. El diálogo puede ser valedero en tanto y en cuanto de él salgan resultados positivos, es decir, que se atiendan los requerimientos populares.

En las actuales circunstancias, si el gobierno dice tener voluntad para dialogar, debe dar señales positivas, lo que implica levantar el estado de excepción y anunciar su acuerdo con al menos una parte de

la plataforma planteada y el resto debatir cómo ejecutarlo. El movimiento indígena y popular que protesta debe mantener su acción en las calles en Quito y en las provincias, porque es el único mecanismo que obliga al gobierno a atender las demandas; además, debe incorporarse a este proceso la investigación de los responsables de la muerte de los cuatro luchadores populares y su sanción.

Los dirigentes del movimiento indígena han dicho que no se retirarán si no es con la aceptación del gobierno de los diez puntos de la plataforma de lucha, esa voluntad —que es la decisión de las bases— debe mantenerse si se inician las conversaciones.

Editorial del semanario En Marcha
Suplemento especial, 24 de junio

Confrontación pueblo – oligarquía

Guillermo Lasso se burla del pueblo. Un momento dice que quiere dialogar, pero inmediatamente lanza jaurías de policías y soldados que apalean y disparan a quienes protestan en la calle, luego, la historia se repite una y otra vez. No es que esté desquiciado, ni nada por el estilo, la combinación de demagogia y garrote es la fórmula que todo gobierno burgués utiliza para garantizar el dominio de la clase a la que representa.

Está claro que los sectores más reaccionarios del gobierno y de la burguesía tienen la consigna de «no dar el brazo a torcer» ante el movimiento indígena y popular que se encuentra levantado, por eso han apelado a los más diversos mecanismos para combatirlo, como el discurso racista y de odio, la mentira descarada para quitar legitimidad a la lucha y, por supuesto, la violencia estatal que ha cobrado la vida de seis luchadores populares, alrededor de dos centenares de heridos y muchos más detenidos. A pesar de todo eso, en un momento la lucha de las masas tuvo arrinconado al gobierno, que incluso se vio obligado a reconocer algunos puntos de la plataforma propuesta por la Conaie, lo que para los sectores más reaccionarios debió ser demasiado y por eso Lasso abandonó el diálogo.

La responsabilidad de lo que ocurre en el país recae directamente en el gobierno, no solo por abandonar el diálogo, sino porque todo el tiempo se ha mantenido sordo frente a las demandas populares y porque pretendió sofocar la protesta con bala y gas. Esa conducta llevó a que en medio del paro tome fuerza la consigna ¡Fuera Lasso, fuera!,

elevando el nivel de la protesta al plano de la lucha política, lo que constituye un paso muy importante dado por el pueblo.

En la Asamblea Nacional se puso en debate este aspecto, pero el pedido de destitución de Lasso no contó con los 92 votos necesarios, alcanzó 84; se conocía de antemano que eso ocurriría, lo sabían muy bien quienes propusieron la destitución, pero lo hicieron para aprovechar el momento político y aparecer del lado del pueblo. No podía esperarse otra cosa de una Asamblea que, salvo pocos asambleístas, no representa los intereses de los trabajadores y el pueblo; no han botado a Lasso, pero la mayoría del pueblo ha gritado en todo el país ¡Fuera Lasso! Con este resultado, el presidente de la República no puede sentirse victorioso, porque apenas 42 asambleístas votaron a su favor, pero más allá de eso, millones de ecuatorianos lo repudian y lo han demostrado durante este levantamiento indígena y popular.

Editorial del semanario En Marcha
Edición 2007, del 29 de junio al 5 de julio

Triunfó la lucha del pueblo

El paro indígena y popular culminó con una importante victoria. Se necesitaron dieciocho días de masivas y combativas movilizaciones en todo el país para forzar al gobierno la aceptación de los puntos contenidos en la plataforma de lucha. Fueron derrotados el gobierno de Guillermo Lasso y la gran burguesía; fue golpeada la política neoliberal fondomonetarista pregonada por las clases dominantes; la prepotencia y el autoritarismo también fueron derrotados. Esta jornada genera un precedente importante: los pueblos unidos y en lucha sobrepasan a enemigos que se presentan como poderosos.

El movimiento popular sale fortalecido, con el ánimo en alto, pues, una vez más se ha ratificado que la lucha es el arma que obliga a los gobiernos a reconocer y otorgar los derechos y las reivindicaciones que, en otras circunstancias, las niegan. El combate debió sobrepasar la ofensiva gubernamental que se expresó a través de una violenta represión, provocaciones y un discurso cargado de amenazas, ataques, difamaciones, mentiras, sobredimensionamiento de algunos acontecimientos, ocultamiento de la acción de las fuerzas represivas. Sintonizados con ello, los sectores más reaccionarios apelaron a un discurso racista y de odio; los grandes medios de comunicación se alinearon con ese libreto para amplificarlo lo máximo posible y, para el efecto, pusieron su parte.

El movimiento indígena ha dado una demostración de su capacidad de acción, de su decisión y valentía para luchar y fue el contingente principal de masas en este levantamiento; junto a él estuvieron las fuerzas del Frente Popular, varias otras organizaciones populares, la militancia de Unidad Popular y de otras organizaciones políticas de izquierda, demostrando que los arietes principales del movimiento popular ecuatoriano son el movimiento indígena y las fuerzas del Frente Popular. Todos ellos contaron con la solidaridad de otros sectores del pueblo.

Esta importante batalla ha sido ganada, pero la lucha de los trabajadores y el pueblo continúa. Existen muchas reivindicaciones y reclamos de distintos sectores que están pendientes y debemos acometer con ellos: la derogatoria del Decreto Ejecutivo 457, que abre la puerta para el despido de miles de empleados y trabajadores del sector público; la lucha para que se ejecute ya la homologación salarial en el magisterio; la defensa de la seguridad social y el pago de las deudas que el Estado tiene con el IESS; el combate en contra de la política laboral antiobrera; la lucha por el presupuesto para la educación en todos los niveles, entre otros aspectos. Además, hay que mantenerse vigilantes para que se ejecuten los puntos de la plataforma del paro que serán analizados en varias mesas técnicas durante los próximos 90 días.

Editorial del semanario En Marcha
Edición 2008, del 6 al 12 de julio